

ARTICULOS

HAMBRE A CAUSA DEL ARMAMENTISMO*

Segundo Montes

RESUMEN

En este artículo, Segundo Montes defiende la tesis siguiente: en los países subdesarrollados como El Salvador, el armamentismo consume los recursos vitales e imprescindibles para la vida y los asigna a la muerte violenta o a la muerte por hambre. Más aún, el hambre ha sido utilizada como arma de guerra en contra de las mayorías populares.

La enorme cantidad de datos de toda clase que Montes proporciona a lo largo de su artículo confirma la tesis planteada y lleva a concluir que el armamentismo y el alto costo de la guerra detienen e impiden el desarrollo y han llevado el nivel de vida del pueblo a unos niveles superados años atrás. La guerra no sólo implica la muerte y la destrucción, sino que también se agrava por el hambre generalizada y ya crónica por sí misma.

La masiva ayuda norteamericana, indica el autor, no pretende detener ni reparar el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, a éstas solamente les dan unas migajas del banquete.

El armamentismo, el gasto económico en instrumentos de muerte y destrucción, dejando de lado las consideraciones éticas, desde la perspectiva económica siempre es cuestionable, a no ser que se tome la industria de la guerra como uno de los dinamizadores del aparato productivo. Construir para destruir parece ser un procedimiento carente de lógica interna y global. Pero en los países subdesarrollados, con escasos e insuficientes recursos materiales y humanos para construir un modo de vida menos indigno del ser humano, el armamentismo deduce recursos vitales e imprescindibles para la vida, y los asigna a

la muerte violenta o a la muerte por hambre e inanición.

En el breve espacio que permite esta exposición intentaré sustentar esa tesis, primero con elementos teóricos aplicables al problema, después con los datos más relevantes de la realidad salvadoreña, para entender mejor así la postura oficial de la jerarquía católica de nuestro país.

1. Planteamientos teóricos

No voy a recurrir a los grandes tratados sobre la guerra, el armamentismo, la pobreza o

* Conferencia pronunciada en el *Katholikentag*, en Munich (Alemania), el día 7 de julio de 1984.

cualquier otro aspecto social o jurídico relacionado con el tema que nos ocupa. Un par de citas, de autores sociales contemporáneos que abordan el problema en su globalidad, escritas en un contexto distinto al salvadoreño, tienen la ventaja de enfocar el problema desde una perspectiva más neutral.

Mucha de la literatura ha relacionado y relaciona defensa y desarrollo, no en vano es éste uno de los retos de finales del siglo XX. Los economistas y otros científicos sociales han creído tradicionalmente que los gastos de defensa reducen los recursos disponibles para invertir y, en consecuencia, frenan el ritmo de crecimiento de la economía (Ángel Viñas, "Política económica y política de defensa." *Sistema*, 1983, 56, 12).

Desde un punto de vista ético mantener el actual *status quo* es condenar a los estados del Tercer Mundo a una situación infrahumana. Desde un punto de vista ético los movimientos de liberación del Tercer Mundo frente al imperialismo aparecen justificados porque se les ha reducido a una situación intolerable.

Un pacifismo mal entendido podría llegar a sostener que el coste de la paz es la explotación del Tercer Mundo o el hambre en muchas regiones de la Geografía del globo. Y es evidente que no todos nos pondríamos de acuerdo para mantener como principal y superior este valor.

La segunda condición es que el criterio para juzgar a la sociedad internacional tenga especial consideración de los desheredados de la tierra. Es decir, una sociedad se considerará que progresa si el que está en peores condiciones de esta sociedad progresa con independencia de que el que está mejor en esa sociedad no progrese. Ese sería quizá un buen criterio a seguir para diseñar las nuevas relaciones internacionales basadas —hasta ahora— en una profunda desigualdad y en la cual los grandes sacrificios los están pagando siempre los desheredados de la tierra. En épocas de crisis éstas siempre las pagan —en mayor medida— los que están peor en esa sociedad. Los problemas prioritarios serían, pues, los de los desheredados.

Frente a la dialéctica de la guerra —la dialéctica del amigo-enemigo— hay que pensar en la posibilidad de que el hombre se asocie

frente a un enemigo común que no se puede combatir con la violencia ni con la guerra. Ese enemigo es el hambre, la escasez, la indigencia, el analfabetismo, la enfermedad, la destrucción del medio ambiente y de la naturaleza. Ese enemigo es común a todos los hombres y los esfuerzos de éstos deben ir dirigidos a solucionar estos problemas y no a construir armas que sirvan para arrebatar a inocentes sus medios de subsistencia (Albert Calsamiglia, "Sobre la justificación de la guerra." *Sistema*, 1983, 56, 50-51, 55-56).

Estas breves citas enfocan el problema básico que aflige a El Salvador que, como vamos a ver, no es tanto jurídico, cuanto social. El problema fundamental en nuestro país es el enemigo común de que nos habla Calsamiglia; y la solución aplicada por el gobierno salvadoreño y norteamericano, de armamentismo y guerra, lejos de resolverlo, están agravándolo aún más, hipotecando el subdesarrollo del país por muchas décadas.

2. Situación social antes del conflicto

Antes de que estallara la crisis y el conflicto, las condiciones sociales para las mayorías salvadoreñas eran tales que evidencian cuál era el problema fundamental, explican por sí mismas las motivaciones del movimiento insurgente, y al mismo tiempo dan claridad sobre lo que supone un drenaje de los recursos, ya de por sí escasos e insuficientes, para dedicarlos a la guerra.

Los datos que se ofrecen a continuación, como indicadores más relevantes de esa realidad, están tomados de los últimos años "normales" (1978-1979), antes de que la crisis estallara o alcanzara su clímax.

El Salvador apenas sobrepasa los 20,000 Km.², con una población estimada para esos años en 4.8 millones de habitantes (casi 240 hab./Km.²), con un PIB de 3,664.2 millones de colones (1 ₡. = 0.40 \$) —a precios constantes en base a 1962—, lo que significaba una renta per cápita de 763 colones (305.2 dólares), pero en donde el 8 por ciento de la población percibía el 50 por ciento de la riqueza nacional, mientras que el 92 por ciento restante se tenía que conformar con la otra mitad. Según las estadísticas oficiales, en 1979 sólo había un 8 por ciento de desempleo abierto, pero de los "ocupados" el 51 por ciento tenía empleos de tiempo parcial o con un ingreso inferior al del salario mínimo-subempleo (*ECA*, 1983, 414-416, 439-458).

La tasa de crecimiento vegetativo de la población superaba el 3 por ciento anual; el índice de matrimonios civiles apenas alcanzaba el 3.4 por mil habitantes al año, mientras que el de matrimonios religiosos —en un país católico— sólo era de 2.1 por mil; el 66.7 por ciento de los hijos son ilegítimos; el analfabetismo oficial en 1979 era de 31.5 por ciento para todo el país, pero en el área rural (más del 60 por ciento de la población) y para el sexo femenino se elevaba a 44.6 por ciento; si bien el “analfabetismo funcional” se puede elevar, cuando menos, el 75 por ciento. La tasa de mortalidad infantil era de 59.5 por mil nacidos vivos; el 79.4 por ciento de la población no dispone de agua potable; había 2.9 médicos, 0.4 odontólogos y 2.9 enfermeras por cada 10,000 habitantes —si bien fuera de la capital la proporción es incomparablemente inferior—, y 1.3 camas hospitalarias por mil habitantes; sólo 31.6 por ciento de las madres tienen algún tipo de atención médica o para-médica en el parto. En el campo únicamente hay trabajo durante todo el año para el 37 por ciento de la población; a nivel nacional el desempleo y subempleo superaban el 60 por ciento de la PEA (Segundo Montes, “El papel de la religión en la planificación familiar,” ponencia sustentada en “5th International Conference on Voluntary Surgical Contraception,” Santo Domingo, República Dominicana, 5 de diciembre de 1983).

Según los datos oficiales en el período 1976-1977, el 62 por ciento de las familias percibía mensualmente (para un promedio de 5 personas por familia) menos de 300 colones (160 dólares) y el 85.6 por ciento de 600 colones (240 dólares), si bien un 12 por ciento de ellas no alcanzaba a percibir 100 colones (40 dólares). Ver *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*. San Salvador: UCA, documento de trabajo No. 28/2/84-039.

Como resultado de todo lo anterior, el 69 por ciento (según otros, el 74.4 por ciento) de los niños menores de 5 años tenían para esa fecha algún grado de desnutrición (17 por ciento el 2° y 3° grados), el 34 por ciento tenía una talla por debajo del 90 por ciento correspondiente a su edad, y el 22.6 por ciento tenía un peso por debajo del 75 por ciento correspondiente a su edad. (CONAN, “Materiales del seminario sobre alimentación y nutrición.” San Salvador: MIPLAN, agosto de 1982, 56 y 132).

No creo que haga falta insistir, después de escuchar estos datos escalofriantes, en cuál es realmente el problema fundamental de El Salvador. La realidad social es verdaderamente explosiva. Las ideologías vendrán después, y sin esa base objetiva no pueden pasar de ser elucubraciones teóricas o discusiones bizantinas.



“Estamos hartos de balas y armas... el hambre que tenemos es de justicia, de alimento, de medicinas, educación y programas efectivos de desarrollo equitativo.” Mons. Romero.

3. La guerra civil: sus costos, tácticas y consecuencias

Las condiciones sociales anteriormente descritas, soportadas casi estoicamente por las mayorías salvadoreñas durante décadas, se vieron agravadas en los últimos años, y los sucesivos fracasos de tímidos intentos de suavizarlas por reformas, o el cierre político a partidos moderados de oposición a través de fraudes continuados y cada vez más escandalosos, fueron elevando la conciencia del campesinado y de las masas urbanas empobrecidas. Las organizaciones populares que iban tomando fuerza creciente fueron reprimidas con mayor dureza cada vez, obligándolas a armarse o aliarse con los movimientos guerrilleros para darles protección, y conformar así un verdadero ejército revolucionario. Estaban dadas las condiciones para una guerra civil, que hace sus primeros ensayos bélicos en 1980, pero que a partir de enero de 1981 alcanzó proporciones nacionales y continuas, sin que se le vea salida a corto plazo.

3.1. Costos de la guerra civil

El armamentismo de parte y parte, la guerra civil misma, van a tener elevados costos en todos los órdenes, en detrimento creciente de las condiciones materiales y sociales de este país subdesarrollado, retrocediendo a niveles anteriores a los de la segunda guerra mundial.

Los costos de esta guerra, en vidas humanas, se elevan a más de 5,000 combatientes muertos en ambos lados y a un número considerablemente mayor de heridos, lisiados y mutilados, a más de 50,000 (más del 1 por ciento de la población) civiles asesinados (casi en su totalidad por las fuerzas armadas y por los escuadrones de la muerte), a más de 2,000 presos y desaparecidos políticos. Como consecuencia del conflicto, además de los muertos, en el interior del país hay 468,000 desplazados (9.75 por cientos de la población total), en México y Centroamérica había, en julio de 1983, otros 244,000 salvadoreños refugiados, y 500,000 más en Estados Unidos; lo que da un total de 1.224,000 salvadoreños (25 por ciento del total de la población) desplazados y refugiados por la crisis del país. (Americas Watch, "El Salvador's other Victims: The War on the Displaced." Lawyers Committee for International Human Rights, New York, abril de 1984, 122).

Por lo que respecta a recursos económicos para la guerra, de un presupuesto en 1979, para el ramo de defensa y seguridad pública, fijado en 127.3 millones de colones (8.76 por ciento del presupuesto general de la nación), frente a un 20.21 por ciento para educación, 10.17 por ciento para salud pública, 6.86 por ciento para agricultura y 16.53 por ciento para obras públicas; se pasó en 1983 a 393.3 millones (19.1 por ciento) para defensa, contra el 16.85 por ciento para educación, 8.68 por ciento para salud, 7.68 por ciento para agricultura (a pesar de la implementación de la reforma agraria) y 11 por ciento para obras públicas; y en 1984 se pasó a 535.67 millones (23.3 por ciento) para defensa, contra el 15.35 por ciento para educación, 8.71 por ciento para salud, 6.43 por ciento para agricultura y 10.1 por ciento para obras públicas (*Diario Oficial* 1978, 1982, 1983).

La ayuda militar de Estados Unidos, que en 1979 fue de un millón de dólares (*ECA*, 1982, 403-404, 424), para 1982 fue de 82 millones de dólares (205 millones de colones.) (*Proceso*, 1983, 135, 27-9), en 1983 fue de 81.3 millones de dólares aunque ya en ese año tuvo que llegar parte de los 64.8 millones aprobados por el Congreso para el año fiscal de 1984. (*Proceso*, *Ibidem*; *ECA*, 1984, 425, 176).

Como consecuencia de lo anterior, defensa y seguridad pública, que para 1979 dispuso de un total de 129.8 millones de colones —entre presupuesto y ayuda militar de Estados Unidos—, para 1983 contó con 798.3 millones de ambas fuentes —más de 2 millones diarios—, y en 1984 dispondrá de 1,114 millones si se aprueban las cantidades solicitadas por la administración Reagan, lo que significará más de 3 millones de colones diarios (1.2 millones de dólares). (*ECA*, 1984, 425, 176).

A todo esto hay que añadir las transferencias de fondos que a lo largo del año fiscal la asamblea ha aprobado como refuerzos presupuestarios para defensa: 10.5 millones de colones en la segunda quincena de octubre de 1983 (*Proceso*, 1983, 128, 4), y a comienzos de marzo de 1984 otros 9 millones —al tiempo que recortaba 5 millones a educación, 3 a agricultura y otros 3 a obras públicas para pagar la "deuda política" de las elecciones de 1982 y el adelanto a los partidos para las de 1984 (*Proceso*, 1984, 141, 4-5). Sin embargo, esos fondos parecen ser insuficientes: "al 10 de febrero (de 1984) las fuerzas salvadoreñas de seguridad se han gastado todos los fondos

CUADRO I

Deterioro socio-económico por la guerra

	Renta per cápita	Ingresos fam. mens.	Canasta fam.mens.	Desempl.	-subempleo	ISSS	Educación	Mortal. Salud infant.	
1978-9	₡ 763	12.4% 62.9% 85.6%	₡ 100 ₡ 300 ₡ 600	₡ 486.7	8%	51%	12% PEAO	31.5% analf. (44.6% muj.rur.)	59.5%
1980-1								75.0% Sar. + 550% tosf. + 324% tif. + 273% var. + 93%	
1983-4	₡ 517		₡ 861.94 (96% PEAO por debajo)	38%	80%	10%	maestros -4,000 escuelas -3,000 alumnos -110,000	-31 centros -27.7% medi- cinas	
	Crédito banc. al gobierno		Servicio de la deuda exterior				fuga de capitales	Destrucción guerrilla	
1979-82	+ 3.400%						₡ 1.625 millones	₡ 1.492 millones	
1983-84	+ 22%		med. y largo corto plazo	₡ 449.7 mill, (25.3% export) ₡ 150.0 mill, (8.5% export) ₡ 599.7 mill, (33.8% export)			en todo el período: \$1,000 mill.	en todo el período: \$1,000-1,500 mill.	

asignados para el año fiscal de 1984," lo que justificaría la solicitud del presidente Reagan y la presión por aprobar una cuantiosa ayuda militar de emergencia (*ECA*, 1984, 425, 143). José Napoleón Duarte, apenas elegido presidente de El Salvador, corrió a Washington a solicitar ayuda adicional; en conferencia de prensa (retransmitida al día siguiente, 21 de mayo, por la *V.O.A.*) afirmó que la Fuerza Armada salvadoreña disparaba diariamente 150,000 proyectiles y que le quedaba munición para únicamente tres meses. Las elecciones de El Salvador, el triunfo de Duarte, su visita a Washington y sus conversaciones con prominentes miembros de ambas cámaras, derribaron las últimas barreras, y el Congreso aprobó el 24 de mayo de 1984 los más de 62 millones de dólares adicionales de ayuda militar de emergencia que Reagan había solicitado meses atrás, si bien 30 millones de ellos ya habían sido adelantados por el Pentágono en material bélico (*El Diario de Hoy* y *La Prensa Gráfica*, 25 de mayo de 1984).

Carecemos de datos sobre el armamentismo y los costos de la guerra del lado de los insurgentes, así como de las ayudas exteriores que reciben —que indudablemente tienen que ser elevadas para hacerle frente durante tantos años al ejército nacional, apoyado generosamente por Estados Unidos; aunque menores de lo que éste le asigna propagandísticamente. De todos modos, se constata el incremento de los fondos destinados a la guerra, así como la disminución porcentual para el desarrollo y creación de puestos de trabajo (obras públicas y agricultura) o para las prestaciones sociales (educación y salud). Los costos más directos de la guerra, por lo tanto, van contra el desarrollo y empeoran las condiciones de vida del pueblo, ya de por sí miserables.



3.2. Tácticas de la guerra civil: el hambre

Además de la guerra en sí misma, como acciones armadas y como represión de las posibles bases de apoyo a los movimientos insurgentes, la táctica de utilizar el hambre sistemáticamente para presionar a la población campesina a favor del gobierno, o para restársela a la guerrilla, es algo común en la región. En Guatemala el fenómeno ha sido estudiado más a fondo, y la táctica de "fusiles y frijoles" que usa el gobierno de ese país, procediendo primero a la represión más sangrienta, para después privar al campesinado de las fuentes de alimentación y abastecimiento, a fin de que no les quede otro remedio que entregarse al ejército, ha sido bastante efectiva para aislar y debilitar a la guerrilla, eliminar líderes campesinos e instrumentalizar al resto como de engañados por aquélla y redimidos luego por la institución castrense (*ECA*, 1983, 417-418, 641-662: 420, 845-868).

En El Salvador se ha empleado la estrategia de "sacar al pez del agua," es decir, quitarle la base de apoyo y sustentación, el campesinado, para lo cual se han montado operativos militares arrasadores en las zonas controladas o bajo influjo de la guerrilla, bombardeando, quemando poblados, casas, sembrados, animales y personas, o llevándose a los sobrevivientes a campos de "refugiados" en los que se los atiende y alimenta —para ello se creó CONADES (Comisión Nacional de Desplazados), oficina gubernamental que canaliza la ayuda a desplazados, tanto proveniente de fuentes internas como de ayudas internacionales, principalmente AID y el gobierno norteamericano. A partir de mediados de 1983 se inició el plan CONARA (Comisión Nacional de Restauración de Areas) en el departamento de San Vicente, por el que después de intensas operaciones militares para pacificar la región y expulsar a los guerrilleros, se intentaba reinstalar en sus comunidades a los que habían huído de ellas por la violencia. Sin embargo, a juicio de un equipo de analistas, la medida respondía a fines políticos-militares para asentar una población rural de apoyo al ejército y contraria a la guerrilla en una zona agrícola estratégica —algo similar al plan CORDS (*Civil Operations and Revolutionary [ater Rural] Development Support*) utilizado en Vietnam por los norteamericanos; ante la resistencia de la mayoría de los desplazados a retornar a sus poblaciones de origen —la mayoría no aceptó regresar, y los que lo hicieron no eran pre-

dominantemente los antiguos habitantes de allí—, los funcionarios de CONARA y de AID intentaron forzar a los desplazados a repoblar la zona con la amenaza de que no recibirían, en caso contrario, los alimentos y la otra ayuda que estaban percibiendo y de la cual exclusivamente subsisten, utilizando así el arma del hambre para forzarlos a apoyar la estrategia gubernamental impulsada por los norteamericanos (Americas Watch, 1984, 81-90). Por su parte, CONADES, ante las frecuentes quejas por su trabajo con los “refugiados,” y ante la negativa de los transportistas para llevar los alimentos y demás donaciones para desplazados, porque no se les pagaba desde febrero, publicó un comunicado en el que lamentaba la falta de presupuesto y de recursos para atender a los 308,426 desplazados del país, por lo que ha tenido que rebajar a la mitad las raciones suministradas a 40,000 desplazados en la zona oriental del país, no ha podido pagar a los transportistas ni a los empleados, y tal vez hasta dentro de cuatro meses no lleguen los alimentos, lo cual causará graves problemas a los desplazados (*El Diario de Hoy*, 27 de mayo de 1984,). A su vez, un grupo de 98 maestros, contratados por CONARA para trabajar en el mismo proyecto, en la zona conflictiva rural de San Vicente, denunciaban que aún no les habían pagado los sueldos de los cuatro meses que llevaba el presente curso escolar (*El Mundo*, 12 de mayo de 1984,).

No sólo el costo de la guerra, la carrera armamentista, en países como El Salvador, recae en el deterioro de las condiciones socio-económicas de la población, en detrimento del desarrollo, sino que el hambre mismo es utilizado como una arma de guerra en contra del pueblo, bien sea del que apoya a los movimientos insurgentes, bien sea del que sin llegar a eso teme prestarse a ser un instrumento del ejército contra la base social de la guerrilla.

3.3. Consecuencias de la guerra civil: deterioro galopante

Una de las consecuencias más graves e irreversibles en mucho tiempo —aparte de los costos en vidas humanas y en desintegración familiar y social, de lo que ya se ha hablado—, es el deterioro de las condiciones de vida como producto de la guerra. Ordinariamente sólo se hace referencia a los datos de la destrucción causada por la guerrilla al aparato productivo, sin disponer de datos relativos a la destrucción causada por la

guerra del ejército, en bombardeos, saqueos, arrasamientos, tanto en poblados, casas, sembrados, animales, como en bosques y destrucción ecológica, que tiene que elevarse a cifras muy significativas. Pero veamos los datos de que disponemos.

Para 1983 el PIB se redujo a 2,585 millones de colones, con lo cual la renta per cápita disminuyó a 517 colones (206.8 dólares) —para una supuesta población de 5 millones de habitantes en ese año, si bien los estudios de población, en base a las muertes y emigraciones, arrojan una disminución en el período 1978-1983 de uno por mil, ascendente en los últimos años, predominante en los varones y en edades de hasta los 30 años (J.L. Argüeta, “¿Hacia dónde va la población de El Salvador?.” San Salvador, UCA, documento de trabajo, 1984). En el mismo año de 1983 el desempleo abierto se había elevado al 38 por ciento y el subempleo al 80 por ciento (*ECA*, 1983, 415-416, 439-58).

Los titulares del ministerio de educación manifestaron a comienzos de 1984 que “este año, a causa del reducido presupuesto, no se podrán crear nuevas plazas, no aprobará profesores solicitados y no nombrará a 2,842 nuevos, con lo cual 22,736 niños quedarán sin clases y otros miles de estudiantes no podrán continuar el 3er. ciclo; que debido al actual conflicto se han visto obligados a trasladar 5,000 maestros a zonas urbanas y que hay departamentos, como Chalatenango, donde se hace difícil tener profesores” (*Proceso*, 1984, 136, 7). Pero según datos oficiales del mismo ministerio, para mayo de 1981 se habían cerrado 877 escuelas de educación básica, lo que suponía 107,119 matriculas canceladas, 3,285 secciones suprimidas y 1,542 maestros cesantes (Ministro de Educación, Departamento de Estadística, San Salvador, mayo de 1981). Según un representante de la UNESCO, en 1982 se estimaba que alrededor de 4,000 maestros habían quedado desplazados y de 2,500 a 3,000 escuelas rurales habían sido cerradas (Americas Watch, 1984, 122); en 1983 el cierre de escuelas afectaba a unos 110,000 estudiantes, más del 11 por ciento de la educación básica (*ECA*, 1984, 425, 150-2).

La canasta de consumo familiar tipo urbano, que en 1979 tenía un valor de 486.7 colones, pasó a costar, en diciembre de 1983, 861.94 colones; con respecto a 1978, el colón ha reducido su poder de adquisición a 55.8 centavos; para 1983 un 96 por ciento de la PEAO no tenía ingresos

suficientes para adquirir esa canasta mínima. La cobertura del Seguro Social (ISSS), que en 1980 alcanzaba sólo al 12 por ciento de la PEAO, en 1983 se contrajo al 10 por ciento (*Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, 1983, 6, 429-450). Entre 1980 y 1981 los casos registrados de sarampión aumentaron en 550 por ciento, los de tosferina en 324 por ciento, los de tifoidea en 273 por ciento y los de viruela en 93 por ciento; la tasa de mortalidad infantil se elevó en 1981 a 75 por mil (*Americas Watch*, 1984, 168-9).

Durante 1982 el PIB declinó en casi 6 por ciento y en 8 por ciento durante 1983, lo cual significa que la producción de bienes y servicios ha disminuido en 29.4 por ciento desde 1979. El sector agropecuario disminuyó su producción en 7.4 por ciento durante 1982, y en 8.7 por ciento en 1983. Los gastos de consumo del salvadoreño promedio, ajustados por inflación, disminuyeron en más del 27 por ciento entre 1979 y 1981, y en un 20 por ciento adicional desde entonces para acá. Entre 1979 y 1983 ha habido un incremento del 97.7 por ciento en el índice general de precios; tanto más dramático si consideramos que el 63 por ciento de las familias salvadoreñas dedican el 62-65 por ciento de todos sus gastos a la alimentación, el vestido y calzado (que han aumentado sus costos en 122 y 153 por ciento respectivamente). Como resultado del decreto 544 (congelación de precios y salarios a partir de 1980), los salarios mínimos reales del sector público y privado han descendido en 65 por ciento entre 1979 y comienzos de 1983. El sistema de salud pública y el seguro social informaron de 31 centros de salud paralizados y 45,000 cotizantes menos, respectivamente; el presupuesto nacional para los hospitales ha reducido la capacidad de adquisición de medicinas en 27.7 por ciento (*ECA*, 1984, 425, 150-2). El crédito bancario al gobierno central aumentó 34 veces entre 1978 y 1982, y para 1983 se proyecta otro incremento del 22 por ciento; el servicio de la deuda externa a mediano y largo plazo se elevó a 449.7 millones de colones, lo cual representa el 25.3 por ciento de las exportaciones de mercancías, a lo que hay que agregar 150 millones de deuda a corto plazo (*Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, 1983, 6, 429-460).

La fuga de capitales al exterior, entre 1979 y 1980, alcanzó la cifra de 1,625 millones de colones, y desde entonces, aunque ha disminuido algo el ritmo y la cantidad, parece que alcanza los mil millones de dólares. Los costos totales directos causados por la guerrilla entre 1979 y 1982 se

elevan a 1,492 millones de colones, y en los últimos cuatro años se elevarían a los 1,000 millones de dólares (*ibidem*); aunque algunos funcionarios salvadoreños calculan los daños desde 1979 a 1983 en 1,500 millones de dólares (*Proceso*, 1984, 143, 4), a los que habría que añadir los causados por el ejército, por la desinversión del capital, el cierre de empresas y la reducción en obras de infraestructura de parte del gobierno. Durante el periodo el FMLN ha elevado a 10,000 el número de sus hombres entrenados y armados, mientras que el ejército nacional ha pasado de 20 a 60 mil hombres (*ECA*, 1984, 425, 138-45; Segundo Montes, *El Salvador: las fuerzas sociales en la presente coyuntura (enero 1980 a diciembre 1983)* San Salvador: UCA, 1984, 25-27 y 171).

Si en alguna parte de la presente exposición se confirma la tesis planteada en el inicio, es en ésta, donde se percibe claramente cómo el armamentismo y el costo de la guerra no sólo detiene e impide el desarrollo, sino que significa un retroceso a niveles ya hacía tiempo superados, siempre dentro de las bajas cuotas para la mayoría de la población. La guerra no sólo causa muerte y destrucción, sino que agrava el problema del hambre y de los beneficios sociales indispensables —ya de por sí insuficientes e inaceptables.

4. La ayuda norteamericana y su destino

Estados Unidos se ha volcado en ayuda a El Salvador durante estos años, como nunca lo habían hecho, y parecen estar dispuestos a incrementarla notablemente. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre el tipo de ayuda, a qué va dirigida principalmente y cómo es usada, para ver si ha paliado, y en qué grado, el problema fundamental del hambre de las mayorías, ya que hasta el momento ha sido incapaz de resolver el conflicto y las causas que lo originaron.

Del millón de dólares que en 1979 dio Estados Unidos en ayuda militar a El Salvador, y de la magra ayuda económica de ese mismo año —en gran parte debido a la denuncia de violaciones a los derechos humanos de parte del gobierno del general Romero—, pasa a una ayuda de casi 500 millones de dólares presupuestados —más las ayudas de emergencia y las encubiertas— en el periodo 1980-1984 sólo para lo militar, más de mil millones de ayuda económica —además de los préstamos favorables y otros beneficios económicos y donaciones en especie—,

Cuadro II
Presupuesto nacional y ayuda norteamericana

	Presupuesto nacional						Ayuda norteamericana			
	Defensa	Educación	Salud	M.A.G.	OO.PP.	Militar	Económica	Desplazados		
1979	¢ 127.3 mill. (8.76%)	20.21%	10.17%	6.86%	\$16.53%	\$ 1 millón	---			
1983	¢ 393.3 mill. (19.1%)	16.85%	8.68%	7.68%	11.0%	\$ 81.3 millones	\$292.4 mill.			\$2 -4.5 mill.
1984	¢ 535.67 mill. (23.3%)	15.35%	8.71%	6.43%	10.1%	\$188.8 millones	\$332.6 mill.			

para hacer un total de más de 1,500 millones de dólares en los cinco años indicados, o sea, un promedio de 300 millones —que va ascendiendo en los años sucesivos, lo cual significa que al gobierno de Reagan le cuesta más del millón de dólares diarios, en los últimos tres años, sostener el régimen salvadoreño. (ECA, 1984, 425, 176; *Proceso*, 1981, 19, 20).

Poco poder de persuasión y de cambio en la política militarista de Washington tendrían las declaraciones de la ONU respecto a la violación de los derechos humanos en El Salvador de parte del gobierno (ECA, 1983, 421-422, 1052-3); o la exposición que hiciera en el mismo sentido el arzobispo James A. Hickey ante la comisión nacional de política de Estados Unidos sobre Centroamérica, hablando a nombre de la conferencia episcopal norteamericana (ibidem, 1054-9); como tampoco la denuncia pública del embajador ante El Salvador, Dean Hinton, sobre las graves fallas del sistema de justicia para investigar y condenar las violaciones más flagrantes a la vida y a los derechos humanos (ECA, 1982, 409, 1056-7); ni la correspondiente denuncia del nuevo embajador, Thomas R. Pickering, contra los “escuadrones de la muerte” y su impunidad más absoluta (ECA, 1983, 421-422, 1040-4). Todo ello demuestra que el verdadero interés no se cifra en el respeto a los derechos humanos, sino en la guerra, una de cuyas estrategias es el terror hacia los posibles simpatizantes de la guerrilla, por lo que la ayuda económica tampoco va dirigida a las grandes mayorías necesitadas y que padecen las consecuencias de la guerra, sino a sostener al gobierno y a reactivar la empresa privada que, como se ha visto, no logra ni siquiera mantener los niveles de producción. Más aún, la ayuda no parece aplicarse a los objetivos que se habían fijado de antemano —al menos en una parte considerable. De la propuesta de 8,000 millones de dólares en ayuda a la región para los próximos años, formulada por la Comisión Kissinger —y de la que una buena parte sería destinada a El Salvador—, el Congreso está mostrando mucha reticencia en su aprobación, “no sólo por su elevado monto, sino también por una serie de alegatos de corrupción y malversación de fondos de ayuda en la región; investigadores de la Oficina General de Contaduría del gobierno norteamericano, en un informe presentado a los ayudantes del Congreso, afirmaron que más del 40 por ciento de los 1,400 millones de dólares de ayuda que la administración Reagan ha dado a El Salvador están faltando; los fondos fueron



“...dado que como salvadoreño y Arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador tengo la obligación de velar porque reine la fe y la justicia en mi país, le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos: Prohíba se dé esta ayuda militar al gobierno...” Mons. Romero al presidente Carter.

dados en forma de transferencia en efectivo al Banco Central de Reserva, donde los procedimientos contables son deficientes; también dijeron que el departamento carecía de los controles adecuados sobre la ayuda a la región y concluían afirmando que ni El Salvador ni otros países de la región tienen capacidad para absorber grandes cantidades de ayuda externa” (*ECA*, 1984, 425, 144; los subrayados son míos).

CONADES dispuso en 1983, para los 264,000 desplazados a los que ayuda, de un presupuesto de 2.4 millones de dólares, de los cuales 2 millones fueron contribución de Estados Unidos —bajo la P.L. 480, I y II— (*Americas Watch*, 1983, 103-4); parte de esa ayuda en alimentos, sin embargo, apareció en mercados públicos de San Vicente, a pesar de que tenía la marca “no es para venta” (*Not for Sale*), lo cual pudiera ser no “un caso aislado”, sino una prueba de la corrupción administrativa en la ayuda a los desplazados (*ibidem*, 110). A pesar de que en el año fiscal de 1983 El Salvador recibió una ayuda económica de más de 292 millones de dólares (el tercer país de asistencia de AID, detrás de Israel y Egipto), muy poco de esto fue para los desplazados: AID y la Oficina de Programas para Refugiados del Departamento

de Estado proveyeron en 1983 sólo 4.5 millones para éstos, si bien un informe del senado sostuvo que el nivel de ayuda propuesto para 1983 fue más del doble de esa cantidad: 10.5 millones; de todos modos, no representaría más que el 3.4 por ciento de la ayuda económica (sin contar la militar), y hay que notar que la ayuda de Estados Unidos a refugiados es canalizada por el gobierno salvadoreño exclusivamente a través de CONADES (*ibidem*, 158-9; *ECA*, 1984, 425, 176); en el programa de alimentos para los trabajadores (desplazados) se pagaban salarios inferiores al “mínimo legal” (*ibidem*, 160-2); los alimentos donados, casi en su totalidad se distribuyeron a través de CONADES, fuera de una pequeña parte a través de ICRC (*ibidem*, 162-4).

Está claro cuáles son los objetivos que persigue la masiva ayuda norteamericana: ganar —o, al menos, no perder la guerra—, sostener al gobierno, y evitar el colapso de la empresa privada. El deterioro de las condiciones de vida de las mayorías no parece ser un objetivo digno de empeño, mientras que a los desheredados y a las víctimas de la crisis y de la guerra únicamente se les arrojan las migajas del banquete.

“La ayuda militar norteamericana sólo puede traer más violencia y un mayor baño de sangre.” Mons. Rivera.

5. Postura oficial de la jerarquía católica

La realidad angustiosa del pueblo salvadoreño, mantenida por décadas con todos los medios necesarios para ello, como hemos podido apreciar en los datos presentados anteriormente, ayudan a comprender la actitud de una Iglesia en mayor o menor grado comprometida con el pueblo de Dios, así como las declaraciones oficiales de la jerarquía católica, que han sido fundamentalmente consistentes a lo largo de los últimos años.

Las verdaderas causas están en las estructuras injustas y en los mecanismos de represión a las justas demandas del pueblo. El Papa Juan Pablo II, en su carta del 6 de agosto de 1982 a la conferencia episcopal salvadoreña decía:

...me doy perfectamente cuenta de que las discordias y las divisiones que turban todavía vuestro país y causan nuevos conflictos y violencias, encuentran su raíz verdadera y profunda en las situaciones de injusticia social: un problema que ha irrumpido con fuerza a nivel político, pero que es sobre todo de naturaleza ética. La metodología de la violencia que ha llevado a una guerra fratricida —situando a un lado a cuantos consideran la lucha armada como un instrumento necesario para conseguir un nuevo orden social, y al otro lado a cuantos recurren a los principios de la ‘seguridad nacional’ para legitimar represiones brutales—, no encuentran una justificación racional y mucho menos cristiana. Frente a los métodos de la violencia se hace necesario instaurar los métodos de la paz, que ‘debe realizarse en la verdad, debe construirse sobre la justicia, debe ser animada por el amor, debe hacerse en la libertad. La reconciliación... no es renuncia a la debida justicia o a la defensa de los pobres y de los marginados’ (ECA, 1982, 405, 761-2).

La voz que resonó con más claridad fue la de Mons. Romero:

Estamos hartos de armas y balas... el hambre que tenemos es de justicia, de alimento, medicinas, educación y programas

efectivos de desarrollo equitativo. Si se llega a los derechos humanos lo que menos necesitaremos serán armas ni métodos de muerte...” (Homilía 21-10-1979 en *La Voz de los sin Voz*, San Salvador, UCA/Editores 1980, 389).

...la ayuda que Estados Unidos pueda hacerlos militarmente sólo estará reforzando a los opresores del pueblo, aunque sea ...armándolos con bombas de gases lacrimógenos y chalecos antibalas. Esto servirá para reprimir con más confianza al pueblo... (id., 4-11-79; ibid., 389).

Por lo tanto, dado que como salvadoreño y Arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador tengo la obligación de velar porque reine la fe y la justicia en mi país, le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos: Prohíba se dé esta ayuda militar al gobierno salvadoreño. Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo moverán a aceptar mi petición evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido país... (fragmentos de la carta Mons. Romero al presidente Carter, leída en la homilía del 17-2-1980; ibidem, 263-4).

Mons. Rivera y Damas, sucesor de Mons. Romero, ha mantenido insistentemente la misma tesis:

La ayuda militar norteamericana sólo puede traer más violencia y un mayor baño de sangre. Esta solución (la negociada) nos parece la más apropiada para terminar con el baño de sangre y con la intervención extranjera en nuestros problemas *El Diario de Hoy*, 6 de abril de 1981).

Al comentar la aprobación de ayuda militar adicional para El Salvador por parte del Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos, dijo que la ayuda debería ser de carácter económico-social y no militar, porque ésta prolongará aún más la guerra. Reiteró que la Iglesia está “a favor de una solución negociada y pacífica” del conflicto (*Proceso*, 1984, 142, 9).

En su homilía del 20 de mayo de 1984, tras la elección de Duarte como presidente de El Sal-



“Creo que hemos llegado a un momento crucial, o nos decidimos a ser artesanos de la paz, que se funda en la justicia, en la libertad o nos resignamos quién sabe por cuánto tiempo, a seguir poniendo los muertos.” Mons. Rivera.

vador, Mons. Rivera le pidió que cumpliera las promesas hechas en sus recientes viajes al exterior, de “no aceptar ninguna intervención extranjera, viniera de Estados Unidos o de Rusia,” y añadía:

que más que ayuda militar, sea ayuda para el desarrollo y que haga valer nuestro derecho como pueblo a la autodeterminación; creo que hemos llegado a un momento crucial, o nos decidimos a ser artesanos de la paz, que se funda en la justicia en la libertad, o nos resignamos quién sabe por cuánto tiempo, a seguir poniendo los muertos; ¿cuándo será el día en que los vivientes alabaremos al Dios de la vida, comenzando por no tener que lamentar más muertes violentas? (*El Mundo*, 21 de mayo de 1984).

El panorama que hemos ido proyectando durante esta exposición nos ha demostrado patéticamente la tesis formulada al comienzo de la misma. El hambre y la injusticia estructural conducen no sólo a la muerte y al sufrimiento de las grandes mayorías desheredadas, sino que, más aún, a la violencia y a la guerra de liberación popular. Pero el armamentismo y la guerra, con todos los mecanismos de que dispone, ya sea el mismo gobierno, ya y sobre todo el apoyo interminable e ilimitado de Estados Unidos, lejos de superar el fondo del problema, lo agrava aún más, hundiendo al pueblo en niveles de pobreza, miseria, muerte, enfermedad y sufrimiento, que de ninguna manera es paliado por las migajas limosneras que le vienen de fuera como para compensar un sentimiento de culpa. La Iglesia, los cristianos, los hombres de buena voluntad de cualquier parte del mundo, no pueden callar ante semejante sufrimiento del pueblo de Dios.